

**ACUERDO DE MUTUA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA PARA LA
PREVENCIÓN, LA CONSTATACIÓN Y LA REPRESIÓN
DE LOS ILÍCITOS ADUANEROS**

ENTRE

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Y

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA, de aquí en más denominadas las Partes,

CONSIDERANDO que los ilícitos aduaneros perjudican los intereses económicos, fiscales, sociales, comerciales, industriales y agrícolas de sus respectivos países;

CONVENCIDOS de que la lucha contra los ilícitos aduaneros podría ser más eficaz a través de una estrecha cooperación entre sus Administraciones aduaneras;

CONSIDERANDO que es importante asegurar la exacta determinación de los aranceles y demás tasas a la importación o a la exportación de las mercaderías y la correcta aplicación de las medidas de prohibición, restricción y control, comprendiendo también estas últimas las referidas al cumplimiento de la normativa sobre la falsificación de mercaderías y de marcas de fábrica;

CONSIDERANDO que el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas representa un peligro para la salud pública y para la sociedad;

TENIENDO EN CUENTA los instrumentos del Consejo de Cooperación Aduanera, en particular la Recomendación sobre Asistencia Mutua Administrativa del 5 de diciembre de 1953;

TENIENDO EN CUENTA la Convención de las Naciones Unidas relativa a la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas del 20 de diciembre de 1988;

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:

CAPÍTULO I

Definiciones

Artículo 1

A los fines del presente Acuerdo se entiende por:

1. "Legislación aduanera", el conjunto de las disposiciones legislativas y reglamentarias aplicables por las dos Administraciones aduaneras y relativas a:

- la importación, exportación, tránsito y depósito de mercaderías y capitales, incluidos los medios de pago;
- al cobro, la garantía y la restitución de derechos y tasas a la importación y exportación;
- a las medidas de prohibición, restricción y control incluidas las disposiciones sobre control de cambios;
- a la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas;

2. "Administración aduanera", para la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos y para la República Italiana, la Agencia de Aduanas italiana que se apoya en la Guardia de Finanzas para desarrollar tareas técnicas específicas;

3. "Ilícitos aduaneros", cualquier violación o tentativa de violación a la legislación aduanera;
4. "Derechos y tasas a la importación y exportación", los aranceles aduaneros a la importación y a la exportación, y todos los otros derechos, tasas o cánones que fueran percibidos sobre la importación y la exportación, incluidos, para la República Italiana, los derechos y tasas previstos por los órganos competentes de la Unión Europea;
5. "Persona", cualquier persona física o jurídica;
6. "Datos personales", toda información referida a una persona, identificada o identificable, sea física o jurídica;
7. "Estupefacientes y sustancias psicotrópicas", todo producto detallado en la Convención de las Naciones Unidas relativa a la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas del 20 de diciembre de 1988, incluidos los que constan agregados en los anexos a la citada Convención.

CAPITULO II

Ámbito de aplicación del Acuerdo

Artículo 2

1. Las Partes, a través de sus Administraciones aduaneras, prestarán su asistencia mutua en las condiciones establecidas en el presente Acuerdo, a los fines de la correcta aplicación de la legislación aduanera y de la prevención, constatación y represión de los ilícitos aduaneros.
2. En el marco del presente Acuerdo, las Partes prestarán toda la asistencia de conformidad con las disposiciones legislativas y administrativas vigentes en cada una de ellas, y dentro de los límites de la competencia y de los medios de que dispongan las propias Administraciones aduaneras.

3. El presente Acuerdo no perjudica las obligaciones, presentes y futuras, en tema de legislación aduanera que le corresponden a la República argentina y a la República italiana en virtud de su pertenencia al Mercosur y a la Unión Europea respectivamente y como Partes Contratantes de acuerdos intergubernamentales ya estipulados o que se estipulen con los demás miembros del Mercosur y de la Unión Europea según corresponda.

4. El presente Acuerdo está limitado exclusivamente a la asistencia mutua administrativa entre las Partes, y no cubre la asistencia en materia penal.

CAPITULO III

Pedido de asistencia

Artículo 3

De oficio o a pedido de la otra Parte, las Administraciones aduaneras se proveerán recíprocamente la siguiente información sobre:

- a) la regularidad de las importaciones en el territorio aduanero de la Parte requerida, de las mercaderías exportadas desde el territorio aduanero de la Parte requirente y el régimen aduanero al cual las mercaderías han sido eventualmente sometidas;
- b) la regularidad de las exportaciones desde el territorio aduanero de la Parte requerida, de las mercaderías importadas en el territorio aduanero de la Parte requirente y el régimen aduanero al cual las mercaderías hubieran sido eventualmente sometidas.

Artículo 4

En el marco de las disposiciones legislativas y reglamentarias, las Administraciones aduaneras de las Partes se comunicarán-a pedido y eventualmente previa investigación-

cualquier información que permita asegurar la exacta percepción de los aranceles y tasas aduaneros, en particular aquella que facilite:

- a) la determinación del valor en aduana, la clasificación arancelaria y el origen de las mercaderías,
- b) la aplicación de las disposiciones concernientes a las prohibiciones, restricciones y controles.

Artículo 5

A pedido de la otra Parte, la Administración aduanera requerida proveerá datos e información y ejercerá una supervisión especial sobre:

- a) las personas respecto de las cuales la Administración aduanera requirente sepa o presuma que han cometido un ilícito aduanero, especialmente aquellas que entraran o salieran del territorio aduanero de la Parte requerida;
- b) las mercaderías transportadas o depositadas, respecto de las cuales la Administración aduanera requirente sospeche que constituyan objeto de un tráfico ilícito hacia el territorio aduanero de la Parte requirente;
- c) los medios de transporte y los contenedores respecto de los cuales la Administración aduanera requirente sospeche que son utilizados para cometer ilícitos aduaneros en el territorio aduanero de alguna de las Partes.
- d) los locales respecto de los cuales la Administración aduanera requirente sospeche que son empleados para cometer ilícitos aduaneros en el territorio aduanero de alguna de las Partes.

Artículo 6

1. Las Administraciones aduaneras se comunicarán recíprocamente, de oficio o a pedido de la otra Parte, datos e información sobre las transacciones, efectuadas o proyectadas, que constituyan o aparenten constituir un ilícito aduanero.
2. En los casos que pudieran perjudicar seriamente la economía, salud pública, seguridad pública o cualquier otro interés vital de una Parte, la Administración aduanera de la otra Parte, en la medida de lo posible, proveerá de oficio datos e información por iniciativa propia.

CAPITULO IV

Pedido de asistencia especial

Artículo 7

1. A pedido de la otra Parte, la Administración aduanera requerida proveerá toda la información sobre la legislación aduanera y el procedimiento aplicable en esa Parte concerniente a las investigaciones realizadas a raíz de un ilícito aduanero.
2. Cada Administración aduanera comunicará, de oficio o a pedido de la otra Parte, toda información disponible sobre:
 - a) modificaciones sustanciales en la propia legislación aduanera;
 - b) nuevas técnicas aduaneras de probada eficacia;
 - c) nuevas tendencias, instrumentos o métodos empleados para cometer ilícitos aduaneros;
 - d) cumplimiento de acciones que puedan ser útiles para prevenir violaciones e ilícitos aduaneros.

3. Las autoridades aduaneras de las Partes, de conformidad con su normativa nacional, buscarán cooperar sobre:

- a) el inicio, desarrollo o mejora de programas específicos de perfeccionamiento para el personal;
- b) la evaluación y el análisis de nuevas tecnologías y procedimientos.

Artículo 8

A pedido, de la otra Parte, la Administración aduanera de una Parte, de conformidad con su legislación, notificará o solicitará a las autoridades competentes que notifiquen, a la persona interesada, residente o establecida en su territorio, todos los documentos y decisiones comprendidos en el presente Acuerdo, que provengan de la Administración aduanera requirente.

Artículo 9

Las Administraciones aduaneras podrán, previo acuerdo y en el ámbito de la propia competencia determinada por la legislación nacional, utilizar las entregas controladas con el fin de identificar a las personas involucradas en un ilícito aduanero.

Artículo 10

Las Administraciones aduaneras se proveerán recíproca asistencia técnica en materia aduanera a través de:

- a) el intercambio de funcionarios, con el fin de incrementar el conocimiento recíproco de las respectivas técnicas aduaneras;
- b) la capacitación y asistencia en el desarrollo de la especialización de sus funcionarios;
- c) el intercambio de expertos en materia aduanera.

CAPITULO V

Comunicación y ejecución de los pedidos

Artículo 11

1. De conformidad con el presente Acuerdo, la asistencia será intercambiada directamente entre las Administraciones aduaneras.
2. De conformidad con el presente Acuerdo, los pedidos de asistencia se presentarán por escrito en el idioma convenido por las Administraciones aduaneras y deberán estar acompañados por toda documentación que pueda resultar de utilidad. Cuando las circunstancias lo exijan, los pedidos también podrán ser formulados oralmente. En tal caso, deberán ser confirmados por escrito sin demora.
3. Los pedidos presentados en los términos del apartado 2 de este artículo, deberán contener los datos que se enumeran:
 - a) el nombre de la Administración aduanera que hace el pedido;
 - b) el objeto y los motivos del pedido;
 - c) un breve informe del asunto, de los elementos de derecho y de la naturaleza del procedimiento;
 - d) los nombres y las direcciones de las partes involucradas en el procedimiento, si se conocieran.
4. La solicitud de seguir un procedimiento particular formulada por una de las Administraciones aduaneras, será satisfecha por la otra Parte siempre que guarde conformidad y cumpla con las disposiciones legislativas y administrativas de la Parte requerida.
5. La información y los datos a que se refiere el presente Acuerdo serán comunicados a los funcionarios designados a tal fin por cualquiera de las Administraciones aduaneras.

Conforme al punto 2 del artículo 20 del presente Acuerdo, las Administraciones aduaneras se comunicarán recíprocamente la lista de tales funcionarios.

Artículo 12

1. A solicitud de una Administración aduanera, la otra Administración aduanera iniciará investigaciones respecto de operaciones que sean, o aparenten ser, contrarias a la legislación aduanera vigente en el territorio del Estado de la Administración aduanera requirente, procediendo luego a remitir los resultados de dichas investigaciones a la Administración aduanera requirente.

2. Estas investigaciones se llevarán a cabo de acuerdo con la normativa vigente en el territorio del Estado de la Administración aduanera requerida. Esta última procederá como si estuviera actuando por cuenta propia.

3. En los casos en que la Administración aduanera requerida no estuviera habilitada para cumplir con la solicitud, procederá a remitirla de inmediato a la Administración competente, solicitando a la vez su cooperación.

Artículo 13

1. Cuando se cursara solicitud por escrito para investigar respecto de un ilícito aduanero, los funcionarios que a tal fin designe la Administración aduanera requirente podrán, previa autorización de la Administración aduanera requerida y en las condiciones que eventualmente ésta imponga:

a) consultar en las dependencias de la Administración aduanera requerida documentos, expedientes y otros datos pertinentes para obtener información concerniente a dicho ilícito;

- b) obtener copias de estos documentos, expedientes y otros datos pertinentes concernientes a dicho ilícito aduanero;
 - c) colaborar con las investigaciones realizadas por la Administración aduanera requerida en el territorio aduanero de la Parte requerida, que sean de utilidad para la Administración requirente.
2. Cuando, según las condiciones previstas en el punto 1 de este Artículo, se encuentren presentes en el territorio de la otra Parte funcionarios de la Administración aduanera requirente, éstos deberán estar en condiciones de acreditar su carácter y el cometido que se les ha asignado.
3. Dichos funcionarios recibirán en el lugar, la misma protección y asistencia otorgada a los funcionarios de Aduana de la otra Parte por la legislación vigente en el territorio de esta última y serán responsables por cualquier ilícito que pudieran eventualmente cometer.

CAPITULO VI

Expedientes y documentos

Artículo 14

1. Cada Administración aduanera, de oficio o a pedido de la otra Parte, proveerá a la otra informes, medios de prueba, documentos o copias autenticadas de documentos con toda la información disponible sobre actividades ejecutadas o planificadas, que constituyan o aparenten constituir un ilícito en el territorio del Estado de la otra Administración aduanera.
2. Los documentos a que hace referencia el presente acuerdo, podrán ser sustituidos por información computarizada, producida en cualquier formato para los mismos fines. En

tal caso y en la medida de lo posible, deberá proveerse todo el material necesario para la interpretación y el uso de la información.

3. Los expedientes y los documentos deberán ser solicitados en originales sólo en los casos en que las copias certificadas se consideraran insuficientes.

4. Los expedientes y los documentos originales recibidos en virtud del presente Acuerdo, deberán ser devueltos a la mayor brevedad.

CAPITULO VII

Expertos y testigos

Artículo 15

1. A pedido de una de las Partes, en relación con un ilícito aduanero, la Administración aduanera requerida podrá autorizar a funcionarios propios, cuando ello fuera posible, a declarar ante las autoridades competentes de la Parte requirente, como expertos o testigos respecto de hechos por ellos constatados en el cumplimiento de sus funciones, y a presentar elementos de prueba. La solicitud de comparecencia deberá indicar claramente para qué caso y en qué calidad, el funcionario deberá declarar.

2. La Administración aduanera que acepte la solicitud detallará, si fuera necesario en la autorización emitida, los límites dentro de los cuales sus funcionarios podrán declarar.

CAPITULO VIII

Uso de la información y de los documentos y protección de los datos.

Artículo 16

1. La información, las comunicaciones y los documentos recibidos en el ámbito de la asistencia administrativa podrán ser utilizados en procedimientos civiles, penales y

administrativos, en las condiciones establecidas por las respectivas legislaciones vigentes en la materia, únicamente para los fines previstos en el presente Acuerdo.

2. Dicha información, así como las comunicaciones y los documentos, podrán ser comunicados a organismos diferentes de los previstos en el presente Acuerdo, sólo si la Administración aduanera que los ha provisto lo consiente expresamente, y siempre que la legislación de la Administración aduanera que los ha recibido no prohíba dicha comunicación.

3. Las restricciones previstas en los puntos 1 y 2 no serán aplicables a la información, las comunicaciones y los documentos relacionados con ilícitos vinculados con estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

4. No obstante, debido a las obligaciones correspondientes a la República Italiana y a la República Argentina por su pertenencia a la Unión Europea y al MERCOSUR respectivamente, las disposiciones del punto 2 del presente Artículo no impiden que la información, las comunicaciones y los documentos recibidos, puedan ser transmitidos cuando se lo solicite, al Consejo del MERCOSUR y a los Estados Miembros de dicho Mercado en el caso de la República Argentina, y a la Comisión Europea y a los Estados Miembros de la mencionada Unión en el caso de la República Italiana.

5. La información, las comunicaciones y los documentos de los cuales disponga la Administración aduanera de la Parte requirente gozarán, en virtud del presente Acuerdo, de la misma protección acordada por la ley nacional de dicha Parte a documentos e información de la misma naturaleza.

Artículo 17

Cuando los datos personales sean suministrados de conformidad con el presente Acuerdo, las Partes les asegurarán un nivel de protección por lo menos equivalente al que surge de la aplicación de los principios enunciados en el Anexo del presente Acuerdo y que constituye parte integrante de este último.

CAPITULO IX

Excepciones

Artículo 18

1. Cuando la Autoridad aduanera requerida considere que la asistencia solicitada podría perjudicar la soberanía, el orden público, la seguridad u otros intereses vitales de la Parte requerida o pudiera implicar la violación de un secreto industrial, comercial o profesional en el territorio de esa Parte, o se presumiera incompatible con sus disposiciones legales y administrativas, podrá negarse a prestar dicha asistencia, prestarla parcialmente o sujeta a ciertas condiciones o requisitos.
2. Cuando la Administración aduanera requirente no estuviera en condiciones de satisfacer una solicitud de naturaleza análoga que pudiera presentar la Administración aduanera requerida, la primera señalará el hecho en su solicitud. En tal caso, la ejecución de dicha solicitud tendrá carácter discrecional para la Administración aduanera requerida.
3. La asistencia podrá ser postergada por la Administración aduanera requerida cuando interfiera con investigaciones o procedimientos judiciales o administrativos en curso. En tal caso, la Administración aduanera requerida consultará con la Administración aduanera requirente para determinar si la asistencia puede ser prestada en las condiciones eventualmente establecidas por la primera.

4. El rechazo o la postergación de la asistencia deberán estar fundamentados.

CAPITULO X

Costos

Artículo 19

1. Las Administraciones aduaneras renuncian a cualquier reclamo por el reembolso de los gastos que origine la aplicación del presente Acuerdo, con excepción de los gastos reembolsados y las retribuciones abonadas a testigos y expertos, así como los costos de intérpretes y traductores, cuando éstos no fueran funcionarios del Estado, que deberán estar a cargo de la Administración aduanera requirente.

CAPITULO XI

Aplicación y ámbito territorial del Acuerdo

Artículo 20

1. Las Administraciones aduaneras dispondrán lo necesario para que los funcionarios de sus servicios encargados de individualizar o perseguir los ilícitos aduaneros, estén en contacto personal y directo.

2. Las Administraciones aduaneras establecerán disposiciones detalladas para facilitar la aplicación del presente Acuerdo.

3. Se crea una Comisión mixta italo-argentina compuesta respectivamente por el Director de la Agencia de Aduanas y el Administrador Federal de Ingresos Públicos o sus representantes, asistidos por expertos, que se reunirán cuando se lo considere necesario, previa solicitud de una u otra Administración, para seguir la evolución del presente Acuerdo, y para buscar soluciones a los eventuales problemas que pudieran surgir.

4. Las controversias para las cuales no se encuentren soluciones amigables serán canalizadas por vía diplomática.

Artículo 21

El presente Acuerdo es aplicable en los territorios de las Partes tal como se los defina en las disposiciones legislativas y administrativas allí vigentes.

CAPITULO XII

Entrada en vigor y denuncia

Artículo 22

El presente Acuerdo entrará en vigencia el primer día del segundo mes de la fecha de recepción de la segunda de las dos notificaciones con la cual las Partes se hayan comunicado por vía diplomática el efectivo cumplimiento de los respectivos procedimientos internos de aprobación.

Artículo 23

El presente Acuerdo se firma con una duración ilimitada pero cada una de las Partes podrá denunciarlo en cualquier momento por vía diplomática.

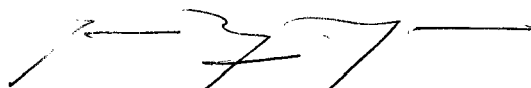
La denuncia tendrá efectos tres meses después de su notificación a la otra Parte.

Artículo 24

A pedido de la otra Parte o al vencimiento del plazo de cinco años desde la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, las Partes se reunirán a fin de analizarlo, salvo que se notifiquen recíprocamente por escrito que dicho análisis no es necesario.

En prueba de conformidad, los representantes suscriptos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo.

HECHO EN *Roma*, el *21*, de *marzo* de *2007* en dos originales, en idiomas español e italiano, siendo ambos textos igualmente válidos.



Por el Gobierno

de la República Argentina



Por el Gobierno

de la República Italiana

ANEXO

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN MATERIA

DE PROTECCION DE DATOS

1. Los datos personales que han sido objeto de tratamiento deberán ser:

- a) obtenidos y procesados legalmente;
- b) registrados para fines específicos y legítimos y no ser usados de modo incompatible con tales fines;
- c) apropiados, pertinentes y no excesivos, en relación con los fines para los cuales han sido obtenidos;
- d) precisos y, cuando sea necesario, actualizados;
- e) conservados de manera que sea posible identificar a los sujetos a los que se refieren, por un lapso que no exceda el requerido para los fines para los cuales han sido almacenados.

2. Los datos personales que provean información de carácter racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas o de otras creencias, filosóficas o morales, afiliación sindical, así como aquellos que se refieren a la salud o la vida sexual, no podrán ser objeto de procesos de tratamiento, salvo que la legislación nacional otorgue suficiente garantía. Estas disposiciones se aplicarán igualmente a los datos personales relativos a antecedentes contravencionales o condenas penales.

3. Deberán adoptarse las medidas de seguridad que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones,

intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.

4. Cualquier persona deberá tener la posibilidad de:

a) saber si los datos personales que a ella se refieren están contenidos en un fichero informatizado, los fines principales para los que son utilizados y los datos del responsable de dicho fichero;

b) obtener, a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto, sin demora y en forma gratuita, la confirmación de la eventual existencia de un fichero que contiene sus datos personales, y la comunicación de tales datos de manera comprensible;

c) obtener, según los casos, la rectificación o cancelación de aquellos datos que fueron procesados contrariamente a las disposiciones previstas por la legislación nacional relativa a la aplicación de los principios fundamentales a que hacen referencia los apartados 1 y 2 del presente Anexo;

d) disponer de medios de apelación cuando no se hubiera dado curso a una solicitud de comunicación, rectificación o cancelación según los casos, a las que se refieren las letras b) y c).

5. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 4 del presente Anexo, no admitirán excepciones salvo en los siguientes casos:

(1) Cuando la legislación de la Parte lo prevea y cuando tal derogación constituya una medida indispensable en una sociedad democrática y abocada a:

a) proteger la seguridad del Estado y el orden público, como así también los intereses esenciales del estado o luchar contra las violaciones penales;

b) proteger a las personas a las cuales se refieren los datos en cuestión, es decir, los derechos y la libertad de terceros.

c) sin perjuicio de lo establecido en los subpuntos a) y b), se deberá brindar acceso a los registros en cuestión en la oportunidad en que el afectado tenga que ejercitar su derecho de defensa.

(2) La ley podrá prever restricciones al ejercicio de los derechos referidos en el apartado 4.-letras b), c) y d) del presente Anexo, con referencia a ficheros informatizados que contengan datos personales utilizados para fines estadísticos o para investigación científica, siempre que no exista riesgo manifiesto de atentar contra la privacidad de las personas a las cuales se refieran dichos datos.

6. Las personas que en virtud del presente acuerdo entren en conocimiento de datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos. Tal obligación subsistirá aún después de finalizada su relación con el titular del archivo de datos. El obligado podrá ser relevado del deber de secreto por resolución judicial y cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública.

7. Las Partes se comprometen a prever sanciones y medios de apelación en los supuestos de violación a las disposiciones de la legislación nacional referida a la aplicación de los principios fundamentales definidos en el presente Anexo.

8. Ninguna de las disposiciones del presente Anexo deberá ser interpretada en el sentido de limitar o menoscabar la posibilidad de una Parte de otorgar a las personas a quienes se refieren los datos en cuestión, una protección más amplia que la prevista en el presente Anexo.

**ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER
LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE
INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ARGENTINA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, qui di seguito denominati le Parti,

CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, sociali, commerciali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Paesi;

CONVINTI CHE la lotta contro le infrazioni doganali potrebbe essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

CONSIDERANDO che è importante assicurare l'esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione delle merci, e la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle relative al rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

TENUTO CONTO degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

TENUTO CONTO della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per:

1. “legislazione doganale”, l’insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:
 - all’importazione, all’esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;
 - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all’importazione ed all’esportazione;
 - alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
 - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
2. “Amministrazione doganale”, per la Repubblica italiana l’Agenzia delle Dogane italiana che si avvale per taluni adempimenti del supporto tecnico della Guardia di Finanza e per la Repubblica argentina l’Amministrazione Federale delle Entrate Pubbliche;
3. “infrazione doganale”, ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
4. “diritti e tasse all’importazione e all’esportazione”, i dazi doganali d’importazione e esportazione e tutti gli altri diritti, tasse o canoni che vengono percepiti

all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse previsti dai competenti organi dell'Unione Europea;

5. "persona" ogni persona fisica o giuridica;
6. "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona, identificata o identificabile, sia fisica sia giuridica;
7. "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione.

CAPITOLO II

Campo di applicazione dell'Accordo

Articolo 2

1. Le Parti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni doganali.
2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana e alla Repubblica argentina quali Stati membri rispettivamente dell'Unione Europea e del Mercosur e Parti Contraenti in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione Europea e del Mercosur.

4. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti, e non copre l'assistenza in materia penale.

CAPITOLO III

Richieste di assistenza

Articolo 3

Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni circa:

- a) la regolarità dell'importazione nel territorio doganale della Parte adita, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte richiedente ed il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate;
- b) la regolarità dell'esportazione dal territorio doganale della Parte adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte richiedente e il regime doganale nel quale le merci siano eventualmente state collocate.

Articolo 4

Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, le Amministrazioni doganali delle Parti si comunicano - su richiesta e, all'occorrenza, previa indagine, - ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano:

- a) la determinazione del valore in dogana, la classificazione tariffaria e l'origine delle merci;
- b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Articolo 5

Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su:

- a) le persone di cui l'Amministrazione doganale richiedente sappia o presuma che abbiano commesso un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano o escono dal territorio doganale della Parte adita;
- b) le merci trasportate o depositate che sono sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte richiedente;
- c) i mezzi di trasporto e i container sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte;
- d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sui territori doganali dell'una o dell'altra Parte.

Articolo 6

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, dati ed informazioni circa le transazioni, effettuate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. Nei casi che possano nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte, ove possibile, fornisce dati e informazioni di propria iniziativa.

CAPITOLO IV

Richieste di assistenza speciale

Articolo 7

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni circa la legislazione doganale e le procedure applicabili in quella Parte che riguardano le indagini condotte su di un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, qualsiasi informazione disponibile su:
 - a) modifiche sostanziali nella propria legislazione doganale;
 - b) nuove tecniche doganali di provata efficacia;
 - c) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali;
 - d) attuazione di azioni che potrebbero essere utili per prevenire violazioni, infrazioni doganali.
3. Le autorità doganali delle Parti, nel rispetto della normativa nazionale, cercano di cooperare su:
 - a) l'avvio, lo sviluppo o il miglioramento di programmi specifici di perfezionamento per il personale;
 - b) la valutazione e l'esame di nuovi macchinari e procedure.

Articolo 8

Su richiesta, l'Amministrazione doganale di una Parte, in conformità con la sua legislazione, notifica o richiede alle autorità competenti di notificare alla persona interessata, residente o stabilita sul suo territorio, tutti i documenti e le decisioni

rientranti nell'ambito del presente Accordo, che provengono dall'Amministrazione doganale richiedente.

Articolo 9

Le Amministrazioni doganali possono, con reciproco accordo e nell'ambito della propria competenza determinata dalla legislazione nazionale, impiegare le consegne controllate allo scopo di identificare le persone coinvolte in una infrazione doganale.

Articolo 10

Le Amministrazioni doganali si forniscono reciproca assistenza tecnica in materia doganale attraverso:

- a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali;
- b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità specializzate dei propri funzionari;
- c) lo scambio di esperti in materia doganale.

CAPITOLO V

Comunicazione ed esecuzione delle richieste

Articolo 11

1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. In conformità al presente Accordo, le richieste di assistenza sono presentate per iscritto nella lingua convenuta dalle Amministrazioni doganali e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano,

le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio.

3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:
 - a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta,
 - b) l'oggetto ed i motivi della richiesta,
 - c) un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e della natura del procedimento;
 - d) i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte purché in conformità e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte adita.
5. Le informazioni e i dati di cui al presente Accordo sono comunicati ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al punto 2 dell'Articolo 20 del presente Accordo, un elenco di questi funzionari viene comunicato dall'Amministrazione doganale di una Parte a quella dell'altra Parte.

Articolo 12

1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, provvedendo poi a trasmettere gli esiti di tali indagini all'Amministrazione doganale richiedente.

2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per conto proprio.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.

Articolo 13

1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
 - a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione;
 - b) procurarsi copie di questi documenti, dossier e altri dati pertinenti concernenti quella infrazione doganale;
 - c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte adita, e utili all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 di questo Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte, essi devono essere in grado di fornire la prova della loro funzione e dell'incarico loro assegnato.

3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

CAPITOLO VI

Dossier e documenti

Articolo 14

1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, mezzi di prova, documenti o copie autenticate di documenti con tutte le informazioni disponibili su attività, portate a termine o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale.
2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. In tal caso e ove possibile, viene fornito tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni.
3. I dossier e i documenti vengono richiesti in originale solo nei casi in cui le copie autenticate si rivelassero insufficienti.
4. I dossier e i documenti originali ricevuti in applicazione del presente Accordo devono essere restituiti al più presto.

CAPITOLO VII

Esperti e testimoni

Articolo 15

1. Su richiesta di una Parte, in relazione a un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita può autorizzare propri funzionari, quando possibile, a deporre davanti alle competenti autorità della Parte richiedente, come esperti o testimoni, circa fatti da essi accertati nell'espletamento delle loro mansioni ed a esibire elementi di prova. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente in quale caso ed in quale veste il funzionario deve deporre .
2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta determina in dettaglio, se necessario, nell'autorizzazione emessa, i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.

CAPITOLO VIII

Uso delle informazioni e dei documenti e protezione dei dati

Articolo 16

1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli previsti dal presente Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.

3. Le restrizioni previste ai punti 1 e 2 non sono applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni connesse a stupefacenti e sostanze psicotrope.
4. Tuttavia, a causa degli obblighi derivanti alla Repubblica Italiana e alla Repubblica Argentina dalla loro appartenenza rispettiva all'Unione Europea e al Mercosur, le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non ostano a che le informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti possano, quando richiesto, essere trasmessi alla Commissione Europea e agli Stati membri della suddetta Unione nel caso della Repubblica italiana e al Consiglio del Mercosur e agli Stati membri di detto Mercato nel caso della Repubblica Argentina.
5. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte richiedente dispone godono, in applicazione del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte ai documenti e alle informazioni della stessa natura.

Articolo 17

Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformità al presente Accordo, le Parti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

CAPITOLO IX

Eccezioni

Articolo 18

1. Qualora l'Autorità doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi vitali della Parte Contraente adita o potrebbe implicare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale nel territorio di quella Parte oppure potrebbe rivelarsi incompatibile con le sue disposizioni legali e amministrative, essa può rifiutare di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla soggetta a certe condizioni o requisiti.
2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sia in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe essere inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, la prima segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO X

Costi

Articolo 19

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano a ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originare dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese rimborsate e le indennità versate ai testimoni ed esperti, nonché per i costi degli interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

CAPITOLO XI

Attuazione ed ambito territoriale dell'Accordo

Articolo 20

1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinché i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto.
2. Le Amministrazioni doganali fissano disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo.
3. Viene istituita una Commissione mista italo-argentina composta rispettivamente dal Direttore Nazionale delle Imposte e dall'Amministratore Federale delle Entrate Pubbliche o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.

4. Le controversie per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.

Articolo 21

Il presente Accordo è applicabile ai territori delle due Parti così come essi sono definiti dalle disposizioni legislative ed amministrative ivi vigenti.

CAPITOLO XII

Entrata in vigore e denuncia

Articolo 22

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con la quale le Parti si saranno comunicate per via diplomatica l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Articolo 23

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.

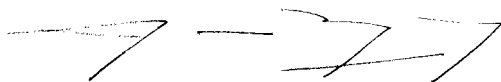
Articolo 24

Su richiesta di una delle Parti o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, le Parti si riuniscono al fine di esaminarlo, a

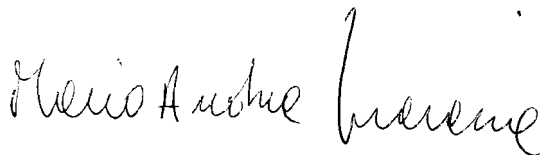
meno che esse si notificchino reciprocamente per iscritto che quest'esame non sia necessario.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A.....*Roma*.....il *21 marzo 2007* in due originali, nelle lingue spagnola e italiana, tutti i testi facenti ugualmente fede.



**Per il Governo della
Repubblica Argentina**



**Per il Governo della
Repubblica Italiana**

ALLEGATO

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati personali che sono stati oggetto di trattamento dovranno essere:
 - a) ottenuti ed elaborati legalmente;
 - b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi;
 - c) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti;
 - d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
 - e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati immagazzinati;
2. I dati personali relativi ad informazioni di carattere razziale ed etnico, opinioni politiche, convinzioni religiose o di altre credenze, filosofiche o morali, iscrizione ad organizzazioni sindacali, così come quelli che riguardano la salute o la vita sessuale di chicchessia, non possono essere oggetto di trattamento, salvo se la legislazione nazionale consente sufficienti garanzie. Queste disposizioni si applicano ugualmente ai dati personali relativi a precedenti contravvenzioni o condanne penali.
3. Si dovranno adottare le misure di sicurezza che risultino necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali, in modo da evitarne ogni alterazione,

perdita, consultazione o trattamento non autorizzato, e tali da consentire di individuare sviamenti di informazioni, intenzionali o meno, sia che questi rischi derivino dall'azione umana sia che derivino dal mezzo tecnico utilizzato

4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:

- a) di conoscere se i dati personali che la riguardano siano contenuti in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati e le coordinate del responsabile di tale schedario;
- b) di ottenere ad intervalli non inferiori a sei mesi, salvo che si dimostri un interesse legittimo al riguardo, senza indugio e gratuitamente, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario contenente dati personali che la riguardano e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;
- c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati elaborati contrariamente alle disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa all'applicazione dei principi fondamentali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente allegato;
- d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).

5. Non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo nei seguenti casi:

(1) Qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica al fine di:

- a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi essenziali dello Stato o lottare contro violazioni penali;
- b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la libertà altrui;
- c) fatto salvo quanto stabilito ai precedenti punti a) e b), si dovrà concedere l'accesso ai registri in questione qualora l'interessato debba esercitare il proprio diritto di difesa.

(2) La legge può prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.

6. I soggetti che in virtù del presente accordo vengano a conoscenza di dati personali sono obbligati al segreto professionale rispetto a tali dati. Tale obbligo permane anche dopo la fine del loro rapporto con il titolare dell'archivio di dati. Il soggetto obbligato può essere liberato dal dovere di segretezza con provvedimento giudiziario e quando sussistano fondati motivi relativi alla pubblica sicurezza, alla difesa nazionale o alla salute pubblica.

7. Ciascuna Parte si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della legislazione nazionale concernente l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente allegato.

8. Nessuna delle disposizioni del presente allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte di accordare alle persone alle

quali si riferiscono i dati in questione, una protezione più ampia di quella prevista nel presente allegato.